

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Auto Interlocutorio No. 395

MAGISTRADO PONENTE: OSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT

MEDIO DE CONTROL:	EJECUTIVO
EXPEDIENTE:	76001-33-33-007-2019-00310-01
DEMANDANTE:	MAGNOLIA PIEDAD MURCIA CEBALLOS notificacionescali@giraldoabogados.com.co
DEMANDADO:	Distrito Especial de Santiago de Cali notificacionesjudiciales@cali.gov.co
ASUNTO:	RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTO QUE DECRETA EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS- CONFIRMA

1. OBJETO DE LA DECISION

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandada, contra el auto interlocutorio del 2 de febrero de 2022, que decretó la medida cautelar de embargo y retención de dineros poseídos por la entidad en los bancos: OCCIDENTE, SUDAMERIS, BOGOTÁ, BANCOLOMBIA, AGRARIO DE COLOMBIA, POPULAR, AV VILLAS, DAVIVIENDA, BBVA, CAJA SOCIAL Y PICHINCHA.

2. ANTECEDENTES

La parte actora interpuso demanda ejecutiva contra el Distrito especial para que se le pagara la suma de \$9.417.268 contenida en el título ejecutivo; Sentencia de segunda instancia que confirma decisión del a-quo por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, el día 2 de febrero de 2016.

Durante el proceso ejecutivo, el apoderado de la parte demandante solicita como medida cautelar se ordene EMBARGAR Y RETENER los dineros que posee el ejecutado.

Posterior a ello, en providencia del 2 de febrero de 2022, el a-quo decreta la medida cautelar de embargo y retención de dineros que ostente el accionado en las entidades bancarias OCCIDENTE, SUDAMERIS, BOGOTÁ,

BANCOLOMBIA, AGRARIO DE COLOMBIA, POPULAR, AV VILLAS, DAVIVIENDA, BBVA, CAJA SOCIAL Y PICHINCHA.

3. DE LA PROVIDENCIA APELADA

En auto interlocutorio del 2 de febrero de 2022, proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Cali, decretó la medida cautelar solicitada por la demandante, con base en los artículos 599, 593 y 594 del CGP, esgrimiendo:

"Conforme a la normatividad citada, resulta procedente la solicitud de embargo y retención de dineros depositados en cuentas de ahorros y cuentas corrientes que pudiere poseer la ejecutada en las entidades bancarias enlistadas en el escrito de la parte ejecutante, conforme a lo dispuesto en el numeral 10º del artículo 593 del Código General del Proceso y para calcular el monto máximo de la medida a decretar se tomarán como base los montos que fueron objeto de la liquidación del crédito en firme³, esto es la suma de \$9.445.189, mas aquella liquidada y aprobada por concepto de costas en monto de \$472.2594, para un límite máximo del embargo, de \$9.917.448.

En punto a la medida solicitada, no existe en principio motivo para considerar que los recursos potencialmente afectados por el embargo sean de carácter inembargable, de manera que las entidades financieras destinatarias de la orden deberán informar al Despacho, dentro del término de un (1) día hábil siguiente al recibo de la comunicación respectiva, si se trata de recursos que ostentan tal calidad conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 594 del C.G.P., en cuyo caso se abstendrán de hacer efectiva la medida cautelar y deberán señalar las normas y las razones por las que no procedería el embargo.

Por último anota el Juzgado que de conformidad con lo establecido en el artículo 599 del C.G.P., para la procedencia de la medida cautelar en el proceso ejecutivo no es necesario que el ejecutante preste caución previa, y en todo caso, sobre ello se proveerá en el evento en que la ejecutada así lo solicite."

4. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

El apoderado judicial de la parte demandada presentó recurso de apelación contra el precitado auto, argumentando lo siguiente:



Menciona que, conforme a los artículos 6° de la Ley 179 de 1994, 19 del Decreto 111 de 1996, 195 parágrafo 2° del CPACA y 594 del CGP, se establece que los recursos incorporados al Presupuesto General de la Nación son inembargables, por ende, aquellos dineros que recibe la entidad están incorporados al presupuesto general de la Nación, que ostentan la calidad de inembargabilidad.

El accionado manifiesta en su recurso que, la medida cautelar carece de procedencia, toda vez que no se identificó el bien que recaería la medida cautelar.

En la argumentación del accionado, advierte que la medida cautelar no es procedente, debido a que el obligado al pago de las obligaciones contenidas en la sentencia que se soporta como título ejecutivo – prima de servicios Decreto 1042 de 1978, es el Ministerio de Educación, en razón a que la demandante se financia o en su momento fue financiada con recursos girados por dicha entidad del SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES acorde lo dispuesto por la Ley 715 de 2001.

Adicionalmente, el extremo pasivo destaca que el sector educativo siendo un servicio público, está centralizado nacionalmente en materia de decisiones políticas y financieras, no obstante, se encuentra descentralizado administrativa y funcionalmente en su prestación, de manera que, por concepto de pago de los costos generados por su prestación, es decir, el pago de salarios, prestaciones y deudas laborales; son sufragados con cargo a la cuota de participación que del SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES – SGP, transfiere la Nación a las entidades territoriales.

El accionado destaca que, el título ejecutivo debe leerse con base en los artículos 148 de la ley 1450 de 2011 y la ley 715 de 2001, por lo tanto, la obligación derivada de la providencia aludida como título ejecutivo es de HACER para la entidad, toda vez que la competencia del Distrito es referente al desarrollo de los trámites para validación y certificación de la deuda por parte del Ministerio de Educación Nacional, con ocasión de ello, la entidad deberá expedir los actos administrativos de reconocimiento que constituyen el título complejo, sin que haya lugar a ordenar seguir adelante la ejecución en contra del Distrito de Santiago de Cali como quiera que ya cumplió con lo de su competencia.

Así las cosas, la entidad concluye que, "(...) a la luz de que la orden de pago inmersa en la Sentencia que se ejecuta, los recursos para resarcir el derecho, tienen que ser girados por el Ministerio de Educación Nacional, de los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, no

procede la medida cautelar de embargo a dichas cuentas por disposición de los numerales 1 y 4 del artículo 594 del CGP."

5. CONSIDERACIONES

Al *sub júdice* le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación del recurso, las cuales corresponden a las contenidas en el Código General del Proceso, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 321 del CGP.

En este sentido, de conformidad a lo establecido en el artículo 321, son susceptibles de apelación los siguientes autos:

"ARTÍCULO 321. PROCEDENCIA. *Son apelables las sentencias de primera instancia, salvo las que se dicten en equidad.*

También son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia:

- 1. El que rechace la demanda, su reforma o la contestación a cualquiera de ellas.*
 - 2. El que niegue la intervención de sucesores procesales o de terceros.*
 - 3. El que niegue el decreto o la práctica de pruebas.*
 - 4. El que niegue total o parcialmente el mandamiento de pago y el que rechace de plano las excepciones de mérito en el proceso ejecutivo.*
 - 5. El que rechace de plano un incidente y el que lo resuelva.*
 - 6. El que niegue el trámite de una nulidad procesal y el que la resuelva.*
 - 7. El que por cualquier causa le ponga fin al proceso.*
 - 8. El que resuelva sobre una medida cautelar, o fije el monto de la caución para decretarla, impedirla o levantarla.**
 - 9. El que resuelva sobre la oposición a la entrega de bienes, y el que la rechace de plano.*
 - 10. Los demás expresamente señalados en este código.*
- (Resalta y subraya el Despacho)

De manera que es competente la Sala para conocer el asunto a tratar.

5.1 MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

3.1. Problema Jurídico

El asunto que se discute se contrae a establecer si es procedente la medida cautelar de embargo a las cuentas del Distrito Especial De Santiago de Cali. Para tal propósito es menester aclarar cuándo es procedente embargar las cuentas de las entidades estatales.

3.2. Recuento normativo y jurisprudencial del proceso:

- **La procedencia de la medida cautelar de embargo y retención de dineros en los procesos ejecutivos**

La Ley 1437 de 2011 no estableció procedimiento para el proceso ejecutivo, pues si bien el artículo 298 se titula "procedimiento", lo cierto es que en dicho precepto normativo se impone al juez el deber de hacer cumplir las obligaciones contenidas en determinados títulos ejecutivos, mas no se refiere a un genuino procedimiento de ejecución.

Sin embargo, la misma normatividad en su artículo 306¹ señaló que, en aquellos aspectos no contemplados en el código, se seguiría el Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso), en el cual de manera expresa se encuentra el trámite del proceso ejecutivo.

Así las cosas, se tiene que los procesos ejecutivos administrativos, hoy en día, se deben tramitar por las reglas del proceso ejecutivo de que trata el artículo 422 y siguientes de la Ley 1564 de 2012.

Lo anterior, ha sido posición reiterada del Consejo de Estado² al manifestar que el proceso ejecutivo está regulado integralmente por el CGP, y que por ello su desarrollo nace bajo el amparo de dicho estatuto.

Respecto a las medidas cautelares en los procesos ejecutivos, el Código General del Proceso, establece que desde la presentación de la demanda el ejecutante podrá solicitar el embargo y secuestro de los bienes del ejecutado.

El artículo 599 del CGP³, establece lo pertinente a las medidas cautelares de embargo y secuestro. Por su parte el numeral 10° del artículo 593

¹ Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

² CONSEJO DE ESTADO. i) Sección Segunda, Subsección B, radicado 680012333000 2016-01034 01 C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; ii) Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-02814-00 C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, entre otras.-´

³ Artículo 599. Embargo y secuestro. El juez, al decretar los embargos y secuestros, podrá limitarlos a lo necesario; el valor de los bienes no podrá exceder del doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas, salvo que se trate de un solo bien o de bienes afectados por hipoteca o prenda que garanticen aquel crédito, o cuando la división disminuya su valor o su venalidad...

En los procesos ejecutivos, el ejecutado que proponga excepciones de mérito o el tercer afectado con la medida cautelar, podrán solicitarle al juez que ordene al ejecutante prestar caución hasta por el diez por ciento (10%) del valor actual de la ejecución para responder por los perjuicios que se causen con su práctica, so pena de levantamiento. La caución deberá prestarse dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del auto que la ordene. Contra la providencia anterior, no procede recurso de apelación. Para establecer el monto de la caución, el juez deberá tener en cuenta la clase de bienes sobre los que recae la medida cautelar practicada y la apariencia de buen derecho de las excepciones de mérito.

ibídem establece que, para realizar embargos de sumas de dinero depositadas en establecimientos bancarios y similares, se comunicará a la correspondiente entidad debiéndose señalar la cuantía máxima de la medida, la cual podrá limitarla el Juez a lo necesario.

- **El principio de inembargabilidad de recursos públicos y sus excepciones**

El artículo 63 de la Constitución Política consagra la inembargabilidad de ciertos bienes del Estado y faculta al legislador para que determine qué otros activos estatales tienen esa misma naturaleza, así:

"Artículo 63.- Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la Ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables."

En ejercicio de dicha potestad, el legislador ha establecido en distintos cuerpos normativos la inembargabilidad de los recursos contenidos en el Presupuesto General de la Nación o los que son girados a las entidades territoriales para inversión social mediante el Sistema General de Participaciones.

Estas disposiciones normativas e incluso algunas de igual contenido proferidas previo a la expedición de la Constitución de 1991, han sido objeto de control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, Corporación que ha establecido que, aunque la regla general sea la inembargabilidad de dichos recursos, hay eventos excepcionales en que se debe permitir su embargo.

El primero de esos pronunciamientos fue la sentencia C-546 de 1992, en la que se analizó la constitucionalidad de los artículos 8º parcial y 16 de la Ley 38 de 1989, y se estableció que las normas acusadas se ajustan a la Constitución bajo el entendido de que *"en aquellos casos en los cuales la efectividad del pago de las obligaciones dinerarias a cargo del Estado surgidas de las obligaciones laborales, solo se logre mediante el embargo de bienes y rentas incorporados al presupuesto de la nación, este será embargable en los términos del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo"*.

Posteriormente, en sentencia C-103 de 1994, la Corte declaró la constitucionalidad condicionada de unos apartes del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989, *"por el cual se introducen algunas modificaciones*

La caución a que se refiere el artículo anterior, no procede cuando el ejecutante sea una entidad financiera o vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia o una entidad de derecho público



al Código de Procedimiento Civil”, en el entendido que “cuando se trata de un acto administrativo definitivo que preste mérito ejecutivo, esto es, que reconozca una obligación expresa, clara y exigible, obligación que surja exclusivamente del mismo acto, será procedente la ejecución después de los diez y ocho (18) meses, con sujeción a las normas procesales correspondientes. Pero, expresamente, se aclara que la obligación debe resultar del título mismo, sin que sea posible completar el acto administrativo con interpretaciones legales que no surjan del mismo”.

Luego, mediante sentencia C-354 de 1997, la Corte declaró la exequibilidad condicionada del artículo 19 del Decreto 111 de 1996, que consagra la inembargabilidad de las rentas incorporadas en el Presupuesto General de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman. En dicha providencia, la Corte señaló que *“los créditos a cargo del Estado, bien sea que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos- y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos”.*

Estos pronunciamientos fueron abordados de manera sistemática en la sentencia C-1154 de 2008, en la que, con ocasión de una demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 21 parcial del Decreto 28 de 2008 *“por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones”*, se construyó la línea jurisprudencial de la embargabilidad de los recursos públicos y se estableció que, pese a que la regla general sea su carácter inembargable, hay situaciones en las que resulta plausible permitir el embargo. Además precisó que dentro de estas excepciones se encuentran aquellos recursos que tienen destinación específica para inversión social -como los del SGP-, cuando excepcionalmente no haya otras cuentas o recursos que resulten suficientes para garantizar el pago de las acreencias, en aras de garantizar el respeto de otros valores constitucionales como *“el reconocimiento de la dignidad humana, el principio de efectividad de los derechos, el principio de seguridad jurídica, el derecho a la propiedad, el acceso a la justicia y la necesidad de asegurar la vigencia de un orden justo, entre otros”.*

En ese mismo pronunciamiento, la Corte precisó que la excepción a la inembargabilidad de los recursos públicos es una respuesta a *“la necesidad de armonizar esa cláusula [la de inembargabilidad] con los*

demás principios y derechos reconocidos en la Constitución, [por lo que] la jurisprudencia ha fijado algunas reglas de excepción, pues no puede perderse de vista que el postulado de la prevalencia del interés general también comprende el deber de proteger y asegurar la efectividad de los derechos fundamentales de cada persona individualmente considerada”.

Así las cosas, la excepción a la inembargabilidad de los recursos públicos se presenta cuando lo que se reclama tiene que ver con **i)** la necesidad de satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, **ii)** el pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias y **iii)** la ejecución de una obligación clara, expresa y exigible contenida en un título emanado del Estado.

En este punto, debe precisarse que estas excepciones mantienen vigente “la regla general de la inembargabilidad de recursos del Presupuesto General de la Nación. Además, en el caso de la ejecución de sentencias y títulos ejecutivos emanados de la administración, la posibilidad de embargo exige que se haya agotado, sin éxito, el plazo previsto en el Código Contencioso Administrativo para el cumplimiento de las obligaciones del Estado”.

A pesar de la existencia de un precedente judicial consolidado frente al reconocimiento de tres excepciones a la inembargabilidad de los recursos públicos, con la expedición de la Ley 1437 de 2011 se introdujo nuevamente en el ordenamiento jurídico una disposición rígida sobre el carácter inembargable de dichos recursos, así:

*“Artículo 195. Trámite para el pago de condenas o conciliaciones.
(...)*

Parágrafo 2o. El monto asignado para sentencias y conciliaciones no se puede trasladar a otros rubros, y en todo caso serán inembargables, así como los recursos del Fondo de Contingencias. La orden de embargo de estos recursos será falta disciplinaria.”

Por su parte, el artículo 594 de la Ley 1564 de 2012, volvió a consagrar legalmente la inembargabilidad de los recursos incorporados en el presupuesto nacional, así:

“Artículo 594. Bienes inembargables. Además de los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán embargar:

*1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social.
(...)”.*

Como puede verse, estas disposiciones son materialmente semejantes a los artículos 16 de la Ley 38 de 1989, 1º del Decreto 2282 de 1989 y 19 del Decreto 111 de 1996, sobre las que la Corte Constitucional declaró su exequibilidad condicionada en las sentencias C-546 de 1992, C-103 de 1994 y C-354 de 1997, respectivamente, en los términos señalados en párrafos precedentes.

Por tratarse de disposiciones con un contenido normativo semejante al que ya fue analizado por la Corte Constitucional en las providencias que consolidaron el precedente que establece excepciones a la inembargabilidad de los recursos públicos, dicho criterio jurisprudencial se mantiene incólume y condiciona la interpretación constitucional adecuada de los nuevos preceptos legales, en el sentido de reconocer la regla general de inembargabilidad de los recursos públicos, pero aceptando que hay tres excepciones relativas a la ejecución de créditos de carácter laboral, o de obligaciones contenidas en sentencias o títulos ejecutivos emanados del Estado, las cuales permiten el embargo excepcional de dichos recursos, siempre que la obligación ejecutada se encuadre en alguna de ellas y que, en el caso de embargo de recursos que tienen destinación específica, se haya constatado que con el embargo de otros recursos de la entidad deudora no se logre cubrir la totalidad de la acreencia.

Esta postura también fue sostenida por el Consejo de Estado⁴ en auto del 8 de mayo de 2014, en la que se señaló:

“En síntesis, la regla general es la inembargabilidad de las rentas y recursos del Estado, salvo que se trate de créditos laborales, el pago de sentencias y demás obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles a cargo del Estado, para lo cual debe acudirse al procedimiento señalado en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo o en los artículos 192, 194, 195 y 297 a 299 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según sea el caso.

⁴ Esta providencia fue proferida por la Sección Cuarta, dentro del proceso con radicado 19717, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

Ahora bien, tratándose de recursos provenientes del SGP, éstos también son inembargables con la única excepción respecto de las obligaciones de naturaleza laboral”.

El mismo Consejo de Estado, en sentencia de tutela del 6 de febrero de 2020⁵, mantuvo su posición frente a la obligatoriedad que tienen los Jueces Administrativos de no desconocer el precedente fijado por la Corte Constitucional tratándose de la aplicación de las excepciones al principio general de inembargabilidad de los recursos públicos.

En suma, es posible la embargabilidad de los bienes y recursos que conforman el Presupuesto General de la Nación, cuando tal determinación sea necesaria a efectos de satisfacer ciertas obligaciones, particularmente cuando éstas son i) de contenido laboral, ir) se derivan de una sentencia judicial proferida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, siempre y cuando el ejecutado no hubiese adoptado las medidas para satisfacerlos en iii) los términos del artículo 192 del CPACA, o consten en títulos emanados de la administración.

- **El trámite para el embargo de recursos que tienen carácter de inembargables.**

El artículo 594 del Código General del Proceso enlista los bienes que tienen carácter de inembargables. No obstante, el párrafo de ese mismo artículo prevé la posibilidad de embargar recursos de esa naturaleza, pues describe un trámite para ello. El párrafo dispone:

"PARÁGRAFO. Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrán de decretar órdenes de embargo sobre recursos inembargables. En el evento en que por ley fuere procedente decretar la medida no obstante su carácter de inembargable, deberán invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia.

Recibida una orden de embargo que afecte recursos de naturaleza inembargable, en la cual no se indicare el fundamento legal para la procedencia de la excepción, el destinatario de la orden de embargo, se podrá abstener de cumplir la orden judicial o administrativa, dada la naturaleza de inembargable de los recursos. En tal evento, la entidad destinataria de la medida, deberá informar al día hábil siguiente a la autoridad que decretó la medida, sobre el hecho del no acatamiento de la medida por cuanto dichos recursos ostentan la calidad de inembargables. La autoridad que decretó la medida deberá pronunciarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de envío de la comunicación,

⁵ Consejo De Estado, Sección Tercera - Subsección A. Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico (E). Bogotá D.C. seis (6) de febrero de dos mil veinte (2020). Radicación número: 11001-03-15-000-2019-04378-00(AC).

acerca de si procede alguna excepción legal a la regla de inembargabilidad. Si pasados tres (3) días hábiles el destinatario no se recibe oficio alguno, se entenderá revocada la medida cautelar.

En el evento de que la autoridad judicial o administrativa insista en la medida de embargo, la entidad destinataria cumplirá la orden, pero congelando los recursos en una cuenta especial que devengue intereses en las mismas condiciones de la cuenta o producto de la cual se produce el débito por cuenta del embargo. En todo caso, las sumas retenidas solamente se pondrán a disposición del juzgado, cuando cobre ejecutoria la sentencia o la providencia que le ponga fin al proceso que así lo ordene”.

De conformidad con lo anterior, si el embargo recae sobre recursos que tengan el carácter de inembargables, el funcionario judicial deberá indicar el fundamento legal para decretar esa medida cautelar.

Ese precepto normativo también establece que las entidades destinatarias de la orden de embargo pueden abstenerse de registrar la medida cautelar sobre los bienes y recursos descritos en el artículo 594 del Código General del Proceso, cuando no se indique el fundamento de la excepción al principio de inembargabilidad, es decir, cuando la orden de embargo no exponga por qué, a pesar de la naturaleza de los recursos, debe aplicarse el embargo de los dineros. En ese evento, las entidades deberán informar a la autoridad judicial sobre el no acatamiento de la medida cautelar, para que esta, en un término de tres días a la comunicación de no acatamiento de la medida cautelar, manifieste si procede alguna excepción al principio de inembargabilidad.

Si dentro del término de los tres días siguientes a la comunicación del no acatamiento de la medida cautelar la autoridad judicial insiste en el embargo, las entidades destinatarias deberán acatarlo. En caso contrario, es decir, si dentro de los tres días siguientes a la comunicación del no acatamiento de la medida cautelar la autoridad judicial guarda silencio, la medida cautelar se entenderá revocada.

CASO CONCRETO.

En el caso en mención, la Sala resolverá el recurso impetrado punto por punto, así:

- Frente a la inembargabilidad de los recursos del Presupuesto General de la Nación; para la Sala es menester aclarar que en ningún momento se pretende embargar dichos recursos a los que hace referencia el accionado, sino frente a cuentas bancarias que



resida en cabeza del Distrito Santiago de Cali, conforme al procedimiento establecido en el artículo 594 del CGP, que preceptúa "(...) el destinatario de la orden de embargo, se podrá abstener de cumplir la orden judicial o administrativa, dada la naturaleza de inembargable de los recursos." Lo que significa es que la medida de embargo decretada por el a-quo, exceptúa las cuentas que ostenten la calidad de inembargables.

- Frente a la carencia de la especificación del número de la cuenta objeto de la medida cautelar como requisito, la Sala manifiesta que dicho requisito alegado por la parte accionada no existe, pues el ordenamiento jurídico no consagra como tal dicho requerimiento, como bien lo destacó el Consejo de Estado así:

*"La Sala advierte que del artículo 83 del Código General del Proceso no se desprende que el actor en su solicitud debiera especificar la clase y los números de las cuentas bancarias a embargar, pues la norma así no lo exige; lo que establece la citada disposición es un nivel de detalle que se determina en atención a la naturaleza de los bienes objeto del proceso o de las medidas cautelares, ya sean inmuebles o muebles y, en ellos, según si son de género o especie, o corresponden a una universalidad, entre otros factores allí descritos. En este sentido, lo que la norma sugiere es que se brinden los datos más precisos para poder identificar los bienes sobre los cuales va a recaer la cautela, pero sin que pueda extremarse la interpretación para señalar que si no aparece esa determinación con detalle se genere una suerte de improcedencia frente a la solicitud de medida cautelar formulada. (...) esta Corporación ha sostenido, por décadas, que una identificación detallada del número de las cuentas bancarias no es requisito ni exigencia oponible a la solicitud de la medida cautelar de embargo como, al parecer, pasa por alto quien acude a tal argumento para sostener uno de los cargos de su apelación. (...) se insiste, no corresponde a una carga legal que el ejecutante tenga el conocimiento minucioso de la información de las cuentas bancarias donde se encuentran depositados los dineros a nombre de la entidad ejecutada, dada la imposibilidad de tener acceso a dicha información. En estos términos, dado que la parte ejecutante pidió que se embargaran las sumas de dinero que la entidad ejecutada tuviera "a cualquier título o contrato bancario" en los bancos Davivienda, Occidente y Agrario de Colombia, dicha información se ajusta a los requerimientos del artículo 83 del CGP."*⁶

⁶ Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Providencia del 22 de noviembre de 2021. CP: José Roberto Sáchica Méndez

- Referente a la argumentación del accionado: "(...) hay que precisar que la medida cautelar dictada tendiente a embargar y retener los dineros que tenga el Distrito Especial de Santiago de Cali en las diferentes entidades bancarias, no es procedente si se considera que el legalmente obligado al pago de las obligaciones contenidas en la sentencia que se soporta como título ejecutivo – prima de servicios Decreto 1042 de 1978- es el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, en razón a que la demandante se financia o en su momento fue financiada con recursos girados por dicha entidad del SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES acorde lo dispuesto por la Ley 715 de 2001."

Se hace un llamado a la parte demandada a que estudie las figuras y momentos procesales, el único obligado por las obligaciones contenidas en el título ejecutivo es el DISTRITO SANTIAGO DE CALI. Así las cosas, no importa la fuente de financiamiento a la entidad sino las resoluciones que dieron lugar a la afectación del derecho al accionante, ya dilucidadas en las sentencias, por lo tanto, en el momento procesal actual no se puede argumentar la falta de legitimidad en pasiva por cuanto existen 2 sentencias condenando a la entidad y se encuentra librado mandamiento ejecutivo que sigue con la ejecución del proceso.

- El extremo pasivo consideró que "el título ejecutivo debe leerse a la luz de la normatividad aplicable, esto es del artículo 148 de la ley 1450 de 2011 y la ley 715 de 2001, por lo que la obligación que deriva de la providencia judicial que se pretende ejecutar ES DE HACER para el Distrito Especial de Santiago de Cali; en el entendido que, lo que compete al ente territorial es adelantar los trámites para validación y certificación de la deuda por parte del Ministerio de Educación Nacional, como en efecto se ha hecho y probado con la contestación de la demanda, luego expedir los actos administrativos de reconocimiento que constituyen el título complejo, sin que haya lugar a ordenar seguir adelante la ejecución en contra del Distrito de Santiago de Cali como quiera que ya cumplió con lo de su competencia". Considera la Sala, que el argumento precitado es a todas luces improcedente, la obligación contenida en las sentencias a ejecutar en el caso concreto es reconociendo una prestación, como consecuencia de ello, condenó a la entidad a reconocer, liquidar y PAGAR a la accionante la prima de servicios, por lo que la entidad debe efectuar el pago y cumplir lo ordenado en el título ejecutivo.
-



Como comentario adicional frente al argumento anterior, para la Sala no es de recibo elevar recursos de apelación con argumentaciones jurídicas que no tienen cabida al petitum del recurso, es decir, no se puede impetrar recurso de apelación en contra de una medida cautelar argumentando el contenido del título ejecutivo, para eso existen las etapas procesales pertinentes.

En síntesis, resulta procedente el decreto de la medida cautelar, por cuanto no se está embargando a ninguna cuenta de banco del Distrito Santiago de Cali que ostente la calidad de inembargabilidad.

Es por lo anterior que, se confirmará el auto apelado.

R E S U E L V E

PRIMERO: CONFIRMAR el auto interlocutorio del 2 de febrero de 2022, proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad del Circuito de Cali, mediante el cual decretó la medida cautelar solicitada, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: En firme la presente decisión, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de origen, para lo de su cargo previas las anotaciones pertinentes en el aplicativo Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

(Firmado electrónicamente)
OSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
PATRICIA FEUILLET PALOMARES
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
LUZ ELENA SIERRA VALENCIA
Magistrada